

paró al C. Jorge Santoscoy, contra el servicio militar que se le exige en el 6º Cuerpo de caballería, y contra la pena de palos que dice se le aplican. 2º: Líbrese oficio al Ejecutivo de la Union, insertándole la presente sentencia, á fin de que se sirva poner al C. Coronel L. Romano á disposicion del C. Juez de Distrito de Jalisco, para que proceda á formarle causa con arreglo á la misma ley de 20 de Enero de 1869.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Agosto 24 de 1874.
—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Trinidad Acuña, contra las disposiciones del Gobierno del Estado, que lo suspendió en sus funciones de presidente municipal de Zacatecas, para consignarlo á los tribunales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en 30 de Mayo último, se presentó el C. Trinidad Acuña, Gefe político constitucional y Presidente del Ayuntamiento de Zacatecas, quejándose que el día 30 de Marzo del presente año, recibió un oficio del C. Goberna-

dor del Estado, segun por el que fué suspendido de su cargo popular de Gefe político y presidente de la asamblea municipal, por los supuestos delitos que siguen: conducta arbitraria como autoridad; embriaguez consuetudinaria; infracciones de leyes, no obstante las disposiciones del Gobierno, de las que nunca tuvo noticia alguna, y por graves faltas de respeto que cometió en sus comunicaciones de 28 y 29 de Marzo de este año, y que así consta del documento que adjuntó bajo el número 1, que sin contradecirlo publicó el Diario Oficial del Gobierno del Estado; y que hacer oficialmente tales declaraciones al C. Gobernador, al suspenderlo de su cargo popular de Gefe político, ha violado las garantías que la Constitucion de 1857 concede á todo ciudadano mexicano, en los artículos 13, 14, 20 y 21; pues fundándose el C. Gobernador para suspenderlo como Gefe político en la fraccion 7ª de las atribuciones que le concede el reglamento económico, puede suspender á los empleados del órden administrativo y no del judicial, cuando infringen las leyes, órdenes ó decretos del Congreso y no órdenes del Gobierno, que bien á las leyes, órdenes ó decretos del Congreso, y puede suspender al Tesorero del Estado, al administrador del hospital; pero nunca á los funcionarios públicos electos popularmente como los Gefes políticos de los partidos del Estado, que son los Presidentes de las asambleas municipales y Jueces únicos de saltadores y plagiarios, y que la Constitucion del Estado establece exactamente la diferencia de empleados del Gobierno y los funcionarios públicos en el título 4º artículo 78, relativos á los funcionarios públicos, dice: "que la responsabilidad oficial de los Gefes políticos, se exigirá ante el Supremo Tribunal," y que en consecuencia, la Constitucion no considera á los Gefes políticos como empleados, sino funcionarios públicos; y supone sin conceder que el C. Gobernador lo nombró Gefe político y Presidente de la asamblea y que son funciones del órden administrativo y no

del judicial, "tomar la inquisitiva á un reo de salteamiento ó plagio, carearlo con los acusadores, oirlo en defensa y sentenciarlo á muerte" suponiendo en fin que es empleado del Gobierno y que le puede aplicar la séptima de sus atribuciones, y despues de cincuenta y tantos dias, el C. Gobernador no ha podido siquiera indicar las infracciones de leyes, órdenes ó decretos del Congreso, no ha podido consignarlo al Supremo Tribunal de Justicia, y sí ha cometido una arbitrariedad suspendiendo á supuesto empleado que no ha infringido orden del Congreso; y que para corroborar la arbitrariedad, suplica al Juzgado se sirva fijar la atencion en lo que dice el C. Gobernador en su oficio de 30 de Marzo, y analizando rápidamente el dicho oficio, primero: que lo suspende por su conducta arbitraria como Gefe político; y que tal declaratoria acompañada de la suspension de su cargo popular, lo priva de los derechos de Gefe político y de ciudadano, y lo dispone el C. Gobernador y no el poder judicial: segundo: se dice que es ebrio consuetudinario, y semejante declaracion lo priva de voto activo y pasivo en las próximas elecciones, la hace el C. Gobernador y no el poder judicial: tercero: se dice en él, que no cumplió algunas órdenes del Gobierno, y que no siendo órdenes del Congreso no debió ser suspendido aunque hubiera sido empleado del C. Gobernador y hubiera infringido sus órdenes: cuarto: que sus subordinados cometieron desórdenes y frecuentes abusos, que se les forme causa y no se les castigue por faltas ó delitos de otros: quinto: que ha cometido infracciones de leyes, no obstante las disposiciones del Gobierno, que al Gobierno se exija su responsabilidad por haber tolerado infracciones de leyes, no se sabe cuantas, pues era de su deber consignarlo al Supremo Tribunal inmediatamente despues de cometida la primera infraccion, y que reasumiendo, que el C. Gobernador ha confundido con el funcionario público, nombrado popularmente, con el empleado nombrado en virtud de fa-

cultades gubernamentales; y que aun siendo empleado del Gobierno y no funcionario público, no debió suspenderlo sino por infractor de leyes, órdenes ó decretos del Congreso y que no puede indicar despues de cincuenta y tantos dias, y que no es aplicable al caso la séptima de las atribuciones del Gobernador y mucho menos el artículo 112 del reglamento publicado en 1852, que no es reglamentario de algun artículo de la Constitucion de 1857, y que cuando podría darle mas facultades que las que concede la Constitucion, y que por último, el C. Gobernador lo ha suspendido indefinidamente, le ha impuesto una pena propiamente tal, suspendiéndolo como funcionario público para procesarlo, y no consignándolo á la autoridad competente, y declarado que es ebrio consuetudinario, y que su conducta como Gefe político fué arbitraria, sin carearlo con sus acusadores y sin oirlo en defensa, sin juzgarlo como competente ó incompetente; y que el C. Gobernador se ha constituido en Tribunal especial para imponerle sin forma de juicio, una pena, fundándose en leyes ó disposiciones que no son aplicables al hecho ó invadiendo las facultades exclusivas del poder judicial, y que en consecuencia, se han violado en su persona las garantías que concede la Constitucion general, en los artículos 13, 14, 20 y 21, porque pide al Juzgado se sirva ampararlo, aun suponiendo que el C. Gobernador lo haya consignado por algun delito á la autoridad competente.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal concluya pidiendo sobre lo principal, se sirva declarar el Juzgado: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Trinidad Acuña, contra los actos del C. Gobernador del Estado, que lo suspendió de su cargo de Gefe político de la Capital por delitos de que debió ponerlo á disposicion del Supremo Tribunal de Justicia, único competente para juzgar á los funcionarios públicos.

Zacatecas, 11 de Junio de 1874.—
Jesus M. Licona.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, 22 de Junio de 1874.—
 Visto el juicio de amparo promovido por el C. Trinidad Acuña, como Gefe político constitucional de este Partido, contra los procedimientos del Supremo Gobierno del Estado y su orden fecha 30 de Marzo del presente año, en la cual se le suspende del empleo por ebrio consuetudinario, arbitrario infractor de las leyes, irrespetuoso, y por su falta de vigilancia y desacuerdo con el Gobierno, ofreciendo consignar al C. Acuña oportunamente al tribunal competente, fundando su procedimiento en la fracción 7ª del art. 39 de la Constitución del Estado y en las facultades que le dá el art. 103 del Reglamento Económico político vigente; considerando el quejoso por esta orden y los demás procedimientos, violadas en su persona las garantías que protegen los artículos 13, 14, 20 y 21 de la Constitución general. Vista la comunicación suscrita por el C. secretario de Gobierno, Pedro Filomeno Nafarrate, que dirigió á este Juzgado, en lugar del informe que se pidió al Supremo Gobierno del Estado. Vistos: el pedimento del C. Promotor fiscal; los documentos presentados por el quejoso; las copias de la secretaría de Gobierno; el alegato del C. Acuña, y la citación para sentencia.

Considerando 1º: que los Gefes políticos de los Partidos son agentes secundarios del Gobierno, y en consecuencia, dependientes administrativos, no obstante que su elección sea popular en el Estado.

2º: que el poder ejecutivo en los Estados y en la Federación, está revestido de una fuerza robusta, para poder llenar la sima de los objetos ó asuntos que son de su competencia; y de esta fuerza nacen las facultades que concede al Gobierno la fracción 7ª del art. 39 de la Constitución particular, y la que expresamente establece el art. 103 del Reglamento Económico-político de los Partidos, de 5 de Mayo de 1852 vigente en

el Estado, y que no está en pugna con las Constituciones general y particular.

3º: que la orden del Supremo Gobierno del Estado fecha 30 de Marzo último, en términos legales, está arreglada á las disposiciones citadas.

4º: que la referida orden de 30 de Marzo, no contiene resoluciones, y los motivos ó acusaciones que sirven de base para la suspensión, verdaderos ó falsos, bien ó mal expuestos, no tienen el carácter de decisiones del poder judicial.

5º: que la suspensión del C. Trinidad Acuña, para hacerse la consignación al Juez competente con el objeto de que sea juzgado, no debe estimarse como una pena, conforme á lo dispuesto en el art. 60 del Código Penal vigente en el Estado.

6º: que considerado así en lo general, la citada orden está ajustada á la Constitución particular y á las leyes, pero no resulta lo mismo examinada en el modo con que se ha cumplido y ejecutado por el mismo Gobierno.

7º: que antes de examinar este punto esencial en el juicio, deben establecerse otras consideraciones, que son absolutamente necesarias para decidir sobre la queja del C. Acuña.

8º: que el Supremo Gobierno del Estado, como autoridad ejecutora, no rindió el informe que se le pidió, por estar ausente de esta Capital, y no puede dársele á la comunicación del C. Nafarrate este carácter, porque la Constitución del Estado no le dá mas facultades que las de autorizar las resoluciones del Gobierno, y en el presente caso ha procedido como Ministro de Estado, sin que conste la facultad legal delegada, y no admitirse en el mismo Estado por su Constitución y leyes particulares, la delegación de las facultades y los deberes del Gobernador en la persona del secretario, por ningún motivo, lo que hace que la comunicación de este y las copias que remite, no tengan valor como documentos oficiales, sino puramente como particulares, quedan-

do sin informe justificado la queja del C. Acuña.

9º: que este vicio no se ha subsanado por alguna comunicacion posterior que ratifique la del secretario, subsistiendo por consiguiente la falta de informe de la autoridad á quien se le pidió.

10: que pèdido el informe al Supremo Gobierno del Estado en primero del presente mes, trascurridos los dos meses de la suspension facultada por la Constitucion y el Reglamento en los arts. citados, dura todavia, sin que se haya consignado aun al C. Acuña á la autoridad competente.

11: que de aquí resulta, que la suspension sea indefinida y que sin estar suspenso el C. Acuña por otra autoridad competente, al no haber sido repuesto en su empleo, por la suspension del 30 de Marzo, el Supremo Gobierno ha extralimitado sus facultades, y la ejecucion de la citada orden en estos términos es ilegal, arbitraria y se constituye en verdadera pena, violándose las garantías que protegen los arts. 13 y 14 de la Constitucion general, por no corresponder al Gobierno imponer pena y calificar los hechos que estan fuera de su jurisdiccion administrativa.

12: que pasados dos meses sin haber hecho la consigna á la autoridad competente, ha procedido el Gobierno arbitrariamente, pues se ha separado del permiso de la Constitucion que requiere sea hecho oportunamente para que puedan correr todos los términos legales de la detencion y la prision si hubiere lugar á ella.

13: que el C. Gefe político Acuña, en los delitos oficiales de que sea acusado, goza de todos los derechos que los procesados tienen por los arts. 20 y 21 de la Constitucion.

14: que no puede decirse que la consignacion no tiene tiempo determinado para hacerse, porque como dice el Sr. Castillo Velasco en sus apuntamientos para el estudio del Derecho Constitucional, al hablar de la garantía que protege el art. 20 (pag.

57) "envuelve esta garantía por necesidad, el precepto á la autoridad aprehensora de consignar al acusado inmediatamente á su juez competente", para que puedan disfrutar de las garantías que señala el citado artículo.

15: que esta interpretacion es natural, lógica y legal, y se confirma con lo dispuesto en las Constituciones de los demas Estados, que requieren se haga la consignacion del C. Gefe político inmediatamente y con el expediente que se haya instruido, como puede verse en la obra citada desde la página 363 á 818, equivaliendo el adverbio oportunamente, empleado en la Constitucion del Estado, al que se usa en otras de inmediatamente.

16: que teniendo el C. Gefe político Acuña como reo, todos los derechos que al hombre garantiza la Constitucion general; en estas circunstancias, el no haber sido consignado inmediatamente á la autoridad competente, instruyéndose el expediente respectivo por el Gobierno despues de la suspension, como aparece de las pruebas presentadas, se atacan, se vulneran por el Gobierno, las garantías que protegen los arts. 20 y 21 de la Constitucion general, en la persona del C. Acuña.

17: que si bien es cierto que por el amparo no pueden restituirse las cosas al ser y estado que antes tenian, queda expedito al quejoso el recurso de responsabilidad contra el Gobierno, y para lo sucesivo queda indemnizado el mismo quejoso con la restitution del empleo, del que está separado de una manera arbitraria y fuera de la autorizacion legal que tiene el Gobierno para que continúe, y

18: que el lenguaje usado por el C. Acuña en este juicio y el del secretario del Gobierno, considerándolo como irrespetuoso, no es en mengua del Juzgado, sino de las personas y autoridades que lo han usado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el art. 101 de la Constitucion general, y en la ley de 20 de Enero de 1869, de con-

formidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y en el alegato del quejoso, cuyas razones se adoptan aunque no queden todas expresadas; sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

1º: que la Justicia de la Union protege y ampara al C. Trinidad Acuña, Gefe político de la Capital, contra los procedimientos del Supremo Gobierno del Estado, y su orden de 30 de Marzo último, que lo suspendió por dos meses, porque al no consignarlo oportunamente, habia formado despues el expediente; y no restituido en su empleo concluidos los dos meses, han sido violadas en la persona del C. Acuña, las garantías que protegen los arts. 13, 14, 20 y 21 de la Constitucion general.

2º: hágase saber; publíquese esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado; sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Junio 22 de 1874.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Trinidad Acuña, contra las disposiciones del Gobernador del Estado que lo suspendió en sus funciones de presidente municipal de Zacatecas, para consignarlo á los tribunales, con infraccion de los arts. 13, 14, 20 y 21 de la Constitucion federal; vista la comunicacion de la Secretaría de gobierno del Estado; el pedimento fiscal; la sentencia del Juez de Distrito, y

Considerando: Que las leyes particulares del Estado de Zacatecas, autorizan al Gobernador para suspender á los presidentes

municipales hasta por dos meses, para consignarlos á los tribunales.

Que habiendo pasado en el presente caso mas de dos meses desde que se decretó la suspension del C. Trinidad Acuña, sin que haya sido consignado á la justicia ordinaria, el Gobierno del Estado extralimitándose en sus facultades legales, ha convertido en una pena arbitraria la suspension mencionada, con violacion de la fraccion 2ª del art. 14 de la Constitucion.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la misma, se declara: que es de reformarse la sentencia del Juez de Distrito en los siguientes términos:

La Justicia de la Union ampara y protege al C. Trinidad Acuña, contra la suspension decretada por el Gobierno del Estado en todo lo que ha excedido del término prescrito por la ley.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Agosto 11 de 1874.—*Enrique Landa.*